



## *Cámara Federal de Casación Penal*

Registro N° 1537/2024

//nos Aires, a los diez días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal de manera unipersonal por el señor juez doctor Carlos A. Mahiques, para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en el presente legajo **FSM 2549/2011/TO1/ES1/2/CFC3**, del registro de esta Sala I, caratulado: "M[REDACTED], Melisa Cecilia s/recurso de casación", de cuyas constancias **RESULTA:**

**El señor juez Carlos A. Mahiques dijo:**

**I.** En fecha 6 de mayo de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, integrado de manera unipersonal, resolvió: "**1. SUSPENDER EL JUICIO A PRUEBA** respecto a Melisa Cecilia M[REDACTED], (...), por el lapso de un año (art. 76 ter del Código Penal), (...). **2. IMPONER** a Melisa Cecilia M[REDACTED] el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta por el término de un (1) año, (...) **a)** fijar residencia; **b)** realizar tareas comunitarias en CARITAS (Rosario) por el lapso de un año a partir de que la imputada acredite ante este Tribunal el primer mes de cumplimiento de la tarea; **c)** someterse al control del Juez de Ejecución; **d)** presentar bimestralmente las constancias de cumplimiento de las tareas **3. IMPONER** a la probada el pago de la suma de pesos ciento cincuenta mil (\$150.000) en concepto de



*multa y \$80.000 en concepto de reparación del daño, este último será deposit(ad)o a favor del S.E.D.R.O.N.A.R. (...) ”.*

**II.** Que, contra esa decisión, la Unidad de Información Financiera interpuso recurso de casación, que fue concedido y mantenido en la instancia.

**III.** El recurrente encauzó su remedio procesal bajo los motivos de agravio previstos en el inciso 1° del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), al considerar que se ha verificado una errónea aplicación del artículo 76 *ter* del Código Penal (CP).

Esgrimió que la sentencia recurrida contiene defectos conceptuales respecto de los supuestos de aplicación del instituto previsto en el art. 76 bis del Código Penal, y dada las circunstancias de los hechos investigados, no sería procedente en el caso de autos.

En efecto, remarcó que el a quo arribó a una sentencia que *"tiene la potencialidad de ponerle fin al proceso, desvinculando a la imputada de manera definitiva, a través de una salida alternativa al proceso penal"*, sin posibilidad de un juicio de debate que permita arribar a una sentencia definitiva.

En ese carril memoró que las particularidades de la causa impiden la concesión del instituto de suspensión de juicio a prueba, ya que se trata de delitos complejos, dada su naturaleza y gravedad. En el caso de autos se investigan maniobras de lavado de activos de gran envergadura que lesionan el orden económico y financiero.

En subsidio, cuestionó la pretendida reparación y el monto de la multa fijado por el tribunal por no





## *Cámara Federal de Casación Penal*

cumplir con los parámetros normativos para su aplicación toda vez que la cifra ofrecida resulta insuficiente para tener por acreditada la reparación integral del daño.

Asimismo, criticó la resolución adoptada por apartarse de los estándares nacionales e internacionales en materia de recupero de activos de origen ilícito. Concretamente, respecto al marco normativo nacional, anotó que "el auto impugnado se aparta de lo normado por la Ley N° 25.246 del año 2000 que modifica y complementa la ley penal de fondo. Y, por el contrario, aplica erróneamente de manera retroactiva la ley 27.739 de 2024. Concretamente el art. 27 según ley 25.246, establece que el destino de los bienes o instrumentos provenientes de los delitos previstos en la misma, corresponde a esta Unidad de Información Financiera. Por el contrario, el Tribunal destina(ría) los fondos recuperados en favor de S.E.D.R.O.N.A.R., apartándose arbitrariamente del precepto legal", en perjuicio de los intereses que la UIF representa y tutela. En el plano internacional, sostuvo que "la resolución cuestionada va en sentido contrario de la Recomendación (...) N° 35 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya que la misma bloquea toda posibilidad de aplicar el instituto en cuestión a los casos de lavado de activos. (...) Como así también la Recomendación N° 4 del GAFI respecto a los mecanismos que



*el Estado debe adoptar para el decomiso de los bienes objeto del lavado”.*

En consecuencia, solicitó que se revoque el auto que suspende el juicio a prueba y se prosiga con el correspondiente juicio oral y público.

Finalmente, hizo reserva del caso federal.

**IV.** Que en la oportunidad prevista por los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del CPPN, la defensa particular de M [REDACTED] amplió fundamentos en los que solicitó que el recurso de la querella sea rechazado y se confirme la resolución impugnada.

**V.** Celebrada la audiencia prevista en el artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación, la parte querellante hizo uso de su derecho a presentar breves notas, en las que reeditó los agravios traídos en el recurso a estudio.

Reiteró que *“la política criminal reserva dicho beneficio como solución alternativa del conflicto para delitos de menor cuantía, no siendo aplicable a casos que revisten gravedad institucional como el de autos”*; y descartó que fuera aplicable la suspensión del juicio a prueba, ya que no se cumple con el requisito del art. 76 bis del Código Penal en cuanto a la pena en expectativa que pudiera corresponder, en concreto, no superara los tres años de prisión.

Como colofón, solicitó que se declare nula la resolución cuestionada y se ordene la continuación del juicio oral y público respecto de la encartada M [REDACTED].

Superada dicha etapa procesal el Tribunal pasó a deliberar (art. 469 del mismo cuerpo legal).





## *Cámara Federal de Casación Penal*

**VI.** Cabe señalar que el recurso de casación interpuesto resulta formalmente admisible; ello, por cuanto el impugnante invocó fundadamente uno de los motivos estipulados en el art. 456 del CPPN, se encuentra involucrada una cuestión de naturaleza federal, que impone su tratamiento en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema en Fallos: 328:1108 ("Di Nunzio, Beatriz Herminia"), y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y fundamentación requeridos por el citado cuerpo legal.

**VII.** A fin de dar adecuado tratamiento a los agravios planteados por la parte recurrente, cabe a esta altura realizar un breve racconto del devenir de las presentes actuaciones para una mejor comprensión de la cuestión traída a estudio.

Conforme surge del Sistema de Gestión Judicial (LEX100), Melisa Cecilia M[REDACTED] se encuentra requerida a juicio por cuanto "la operatoria investigada y atribuida (...) consistió en el cobro por parte de la nombrada de diferentes giros de dinero efectuadas por personas domiciliadas en la República Argentina y en los Estados Unidos Mexicanos a través del servicio 'Western Union' entre el 29 de junio del año 2006 y el 14 de abril del año 2007. Precisamente la nombrada M[REDACTED] aparecía como destinataria de varios de dichos envíos y concretamente



se le imputó que administró dinero de origen ilegítimo proveniente de la actividad de narcotráfico desplegada entre otros por Mario Roberto S[REDACTED], ello a fin de brindarle apariencia lícita" [...] "en once operaciones por monto total de noventa y un mil seiscientos cuarenta y un pesos con sesenta y un centavos (\$91.642,61)".

Elevadas que fueron las actuaciones a juicio, el tribunal oral, con la conformidad del representante del Ministerio Público Fiscal, hizo lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba respecto de la encausada M[REDACTED].

A ese fin, tuvo en cuenta que "no se halla controvertida la pretensión procesal de la defensa de aplicar el instituto sometido a examen respecto de Melisa Cecilia M[REDACTED], y la postre, la realización de trabajos comunitarios en Caritas Argentina, sito en calle Balcarce 1077 CP de Rosario, provincia de Santa Fe consistentes en 'mantenimiento, limpieza de Cáritas, acomodar ropa y mercadería, limpieza de salones, etc', durante el plazo de un año".

De igual forma indicó que la imputada se encuentra requerida a juicio, en relación al artículo "278 inc. 1 a) -[del CP] normativa vigente al momento de los hechos- esto es lavado de activos (de) origen delictivo".

En esa línea, sostuvo que el tipo penal atribuido establece, en lo que aquí interesa, que "[s]erá reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado,





## *Cámara Federal de Casación Penal*

*con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos (\$ 50.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí".*

A su vez, hizo mérito de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Acosta, Alejandro E. s/ Infracción art. 14, 1° párrafo de la ley 23.737" del 23/04/2008, en la que se recepta la tesis amplia para la suspensión del juicio a prueba, está fuera de discusión su procedencia formal para supuestas conductas típicas cuya pena de prisión en expectativa no supere los tres años previstos en el párrafo 1° y 2° del artículo 76 del CP.

Dicho ello, precisó que el pedido de suspensión de juicio a prueba contó con el consentimiento fiscal, por lo que concluyó que, de las constancias de autos, y principalmente de la audiencia realizada, se hallaban satisfechos los requisitos dispuestos en el artículo 76 bis -párrafos 3° y 4°- del Código Penal; y descartó el carácter vinculante para el tribunal de la UIF, que en su calidad de parte querellante.

De conformidad a las consideraciones precedentes, el tribunal oral estimó que correspondía suspender el proceso respecto de Melisa Cecilia M [REDACTED] por el tér-



mino de un año, plazo que debía computarse a partir del primer mes en que la imputada acreditara haber comenzado a cumplir con las tareas comunitarias (art. 76 ter, Código Penal). "Dentro de ese plazo deber(ía) cumplir las siguientes reglas de conducta: a) fijar residencia; b) Prestar tareas comunitarias en CARITAS, sito en calle Balcarce 1077 de Rosario, consistente en tareas de mantenimiento y limpieza, a razón de tres horas semanales, por el lapso de un año, a partir de que la imputada acredite ante este Tribunal el primer mes de cumplimiento de la tarea; c) someterse al control del Juez de Ejecución; b) presentar bimestralmente las constancias de cumplimiento de las tareas".

Sobre la reparación del daño el magistrado interviniente puso de resalto que no existía controversia en tanto ambas partes convinieron que el monto ascendiera a \$80.000, en un único pago.

Por lo demás, respecto de la pena de multa a imponer, tuvo en cuenta "el monto que resulta de la suma de las operaciones descriptas en la requisitoria de elevación a juicio del MPF, \$91.642,61 (fs. 4278 del expediente digitalizado agregado en solapas digitales), por lo que le (dio) la razón al Fiscal y en consecuencia, fij(ó) la multa mínima prevista para el delito traído a juicio, (...) en dos veces el monto de la operación mencionada, osea \$183.297,22 (ciento ochenta y tres mil doscientos noventa y siete con veintidós centavos), conforme lo acordado por las partes y los parámetros fijados por el art. 278 inciso 1) 'a' del CP (conforme Ley 25.246)".

Por último, en lo que atañe a la pretensión de la Unidad de Información Financiera acerca de que se des-







## *Cámara Federal de Casación Penal*

tine a esa parte tanto el monto ofrecido como reparación así como el producido de la multa, el a quo hizo propios los argumentos del fiscal auxiliar, en orden a que "si bien la ley 27.739 establece que el organismo peticionante se financiará con recursos provenientes tanto de los decomisos ordenados en el marco de las investigaciones de lavado de activos, como de las multas que sea impuestas como consecuencia de ello, en este caso particular, y sin perjuicio de que corresponda otorgársele en otros supuestos, teniendo en cuenta que el antecedente del delito que se investiga en los términos del art. 278, estaría vinculado a la Ley 23.737, conforme el art. 39 de la citada ley, y la excepción prevista en el punto II del art. 27 de la Ley 27.739, entiendo que la reparación del daño ofrecida, y en su caso, la multa, deberán ser destinadas a 'la Lucha contra el Tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo...'" (cfr. art. 39 de la ley 23.737), por lo que el dinero producto de la reparación (\$80.000) sería depositado en favor del S.E.D.R.O.N.A.R.

**VIII.** En el caso, no se advierte que la conformidad dada por el titular de la acción penal haya sido arbitraria, sino que por el contrario se fundó, como se expuso precedentemente, en una interpretación razonable de la ley penal. De este modo, se advierte que



el fiscal brindó razones debidamente fundadas que, más allá del desacuerdo del recurrente, resultan suficientes para ser consideradas vinculantes para la jurisdicción, superando la criba mencionada a la que debe someterse, descartando, de esa forma, la alegada arbitrariedad (cfr. mi voto en causa n° CCC 63872/2013/TO1/CNC1, "Setton, Gustavo Adrián s/suspensión de juicio a prueba", rta. el 7 de abril de 2015, reg. n° 4/2015, y causa CCC 60800/2013/TO1/CNC1, "Menchaca, Diego Rubén s/suspensión de juicio a prueba", rta. el 7 de abril de 2015, reg. n° 4/2015, ambos como juez integrante de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, entre muchos otros).

En definitiva, no surge de la resolución impugnada vicio alguno de fundamentación que lleve a su descalificación por vía de la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros); o de la verificación de graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328; 322:1605). Sabido es que si se considera -como en el caso-, que el recurso es formalmente improcedente, más allá de la celebración de la audiencia de informes en los términos de los artículos 468 del CPPN, procede su desestimación sin un pronunciamiento sobre el fondo en cualquier momento dado que el juicio de admisibilidad que prevé el artículo 444 del Código Procesal Penal de la Nación no tiene carácter definitivo (así, F. De la Rúa, La Casación Penal. El recurso de casación en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, 2ª edición, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, págs. 241/242).





## *Cámara Federal de Casación Penal*

En conclusión, constituye la resolución recurrida una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la especie (Fallos: 295:316;298:21; 300:712; 305:373; 320:2597; 325:1731; 327:2273; 331:1090 y sus citas), y no se advierte -ni así tampoco el recurrente lo demostró- un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o una decisiva ausencia de fundamentación (Fallos 277:144 y 295:356; entre otros).

En definitiva, en virtud de todo lo expuesto, se **RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE** el recurso de casación interpuesto por la parte querellante, con costas (arts. 444, segundo párrafo, 530 y concordantes del CPPN).

Regístrese, notifíquese, hágase saber al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada n° 5/2019 CSJN) y remítase al tribunal de procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

**Firmado: Carlos A. Mahiques. Ante mí: Walter Daniel Magnone.**

